

C.A. de Santiago

Santiago, diecisiete de junio de dos mil veintidós.

A los folios 18 y 19: a todo, téngase presente.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con la siguiente modificación:

En el considerando octavo se sustituye la cifra de \$80.000.000 por el monto que en cada caso se señala a continuación respecto de los demandantes Freddy Cancino Berríos, Mario Alvarez Vergara y Jaime Barraza Contreras y se elimina la referencia a la época a partir de la cual se inicia el cómputo de los intereses.

**Y se tiene en su lugar y, además presente:**

1º) Que tal como se reconoce en el fallo en alzada, los demandantes son víctimas directas de actos atentatorios a los derechos humanos, siendo perseguidos, detenidos y sufriendo además afectaciones a su integridad física.

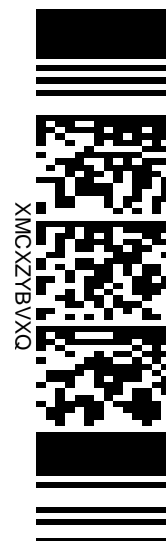
2º) Que conforme a lo anterior, esta Corte es de parecer que los demandantes sufrieron efectivamente un detrimento moral que debe ser reparado a través de una prestación económica, en consideración del tiempo de detención que cada uno de ellos sufrió, así, en el caso de don **Fredy Raúl Cancino Berríos**, quien lo estuvo por 2 días, resulta proporcional fijar una indemnización por \$10.000.000.- (diez millones de pesos); respecto a don **Mario Álvarez Vergara**, quien estuvo detenido por casi 3 semanas, considera esta Corte que es proporcional un monto de \$15.000.000.- (quince millones de pesos); en cuanto a don **Jaime Barraza**



**Contreras**, quien fue detenido por aproximadamente dos meses, se estima proporcional una indemnización de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos); manteniendo el monto de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) fijado por el Tribunal a quo para don **Sergio Enrique Flores Ramírez**, quien estuvo detenido por 1 año y 10 meses.

3º) Que en cuanto a las alegaciones del Fisco de Chile, que han sido nuevamente replanteadas por el recurso de apelación, se coincide con los razonamientos de primera instancia para desecharlas.

En efecto, las normas que invoca el Fisco en apoyo de su defensa consagran más bien un régimen de pensiones asistenciales y no una indemnización por daño moral destinado a reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, desde que no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar las injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización como la solicitada en autos, por lo que necesariamente ha de entenderse que se trata de otra forma de indemnización asumida por el Estado, sin que ello implique la renuncia o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de lo contrario se atenta a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho quienes se sienten perjudicados con los actos descritos en la demanda.



En consecuencia, no procede imputar a la indemnización solicitada por los demandantes las cantidades que en calidad de beneficiarios de las reparaciones y pensiones hayan recibido, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación satisfactiva opuesta a la demanda.

4º) Que, en cuanto a la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo señalado en el artículo 2497 del mismo Código, tal como se señala en el fallo que se revisa, la demandada invoca la prescripción y solicita la aplicación de las normas del Código Civil en virtud de justificar la existencia de ésta a fin de otorgar certeza de las relaciones jurídicas, el resguardo del patrimonio y la libre circulación de los bienes.

Sin embargo, los hechos que se han tenido por acreditados y que sirven de sustento a la demanda se enmarcan en el contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, y es por ello que corresponde desestimar la excepción de prescripción, teniendo para ello en consideración, tal como se ha sostenido por la jurisprudencia, que *“tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los*



*perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno” (Corte Suprema, Rol N°19.301-2018).*

**5°)** Que finalmente la suma dispuesta pagar, deberá considerar los reajustes que le reconoce la sentencia apelada desde que el fallo se encuentre ejecutoriado, más los intereses dispuestos a contar desde que el demandado se constituya en mora.

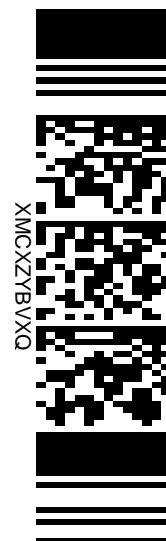
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículos 186 del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de veintiocho de enero de dos mil veintidós dictada en los autos C-34.991-2019 del 29° Juzgado Civil de Santiago **con declaración** que se ordena pagar al Fisco de Chile en favor de don **Fredy Raúl Cancino Berríos**, la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos); de don **Mario Álvarez Vergara**, la cantidad de \$15.000.000.- (quince millones de pesos); y de don **Jaime Barraza Contreras**, la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos); manteniendo el monto de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) para don **Sergio Enrique Flores Ramírez**, todos los montos con los reajustes que reconoce el fallo apelado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada, más intereses a contar de la fecha en que el demandado se constituya en mora.

Acordada con el **voto en contra** del abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett, quien fue del parecer de revocar la sentencia en alzada por:

**1°** Que, tratándose de responsabilidad extracontractual, si el daño producido por el delito civil ya ha sido reparado, no puede pretenderse por las víctimas resarcirse doblemente. En el caso sub judice todos los actores han percibido los beneficios de la ley 19.123

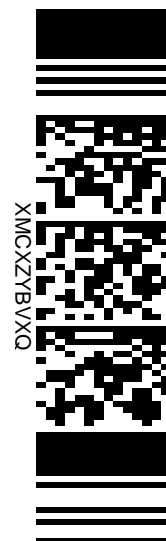


– afirmación que se basa en los dichos de los demandantes en la réplica de fojas 149 – de modo que no procede que perciban por vía judicial una indemnización respecto de un daño ya indemnizado. La citada ley creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó beneficios en favor de las personas que indica, señalándose expresamente en su Mensaje que su finalidad era reparar el daño moral y patrimonial que han sufrido los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que se vio refrendado en su artículo 2° N° 1° al señalarse que es objetivo de dicha normativa *“Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”*, de suerte que el Estado ya ha hecho ingentes esfuerzos reparatorios aceptados por los actores, que se han visto beneficiados por sus disposiciones y que ahora piden a la judicatura, bajo el mismo fundamento, que se les indemnice nuevamente. El artículo 24 de la ley 19.123, citado por los demandantes en su réplica, sólo hizo compatible la pensión de reparación con cualquier otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de modo que no procede extender su alcance a situaciones no previstas en su texto. Luego, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema en una doctrina que este sentenciador hace suya, *“no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19,*



*situación que no corresponde a la de la demandante, quien – como se dijo – percibe las pensiones a que se ha hecho referencia” (causa rol Corte Suprema 4.742-2012, sentencia de 30 de enero de 2013). Luego, la excepción de pago será acogida.*

2° Que, en cuanto a la prescripción, consta del libelo de demanda que se ha ejercido en contra del Fisco de Chile una acción indemnizatoria en que se pretende hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, condenándolo al pago de la suma de novecientos millones de pesos a los cuatro demandantes, más reajustes e intereses y costas. Al efecto debe señalarse, en primer término, que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, que resulta aplicable en todas las materias del ordenamiento jurídico, salvo que la ley determine expresamente la imprescriptibilidad de las acciones. En lo atinente a la responsabilidad extracontractual del Estado – como es la situación en estudio – no existe norma que establezca la imprescriptibilidad, de manera que deben aplicarse las de derecho común, esto es, el Título XXXV del Libro IV del Código Civil. Al efecto, el artículo 2497 del Código de Bello, dispone que: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*. Por consiguiente, de acuerdo con lo anteriormente razonado, debe aplicarse el artículo 2332 del mismo Código, esto es, que las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto. En el caso en estudio, es un hecho de la causa,

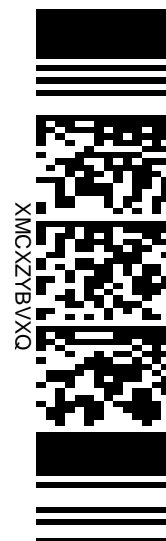


pues no se ha controvertido, que el señor **Mario Álvarez Vergara** lo tomaron detenido, en una primera oportunidad, el 13 de septiembre de 1973, estando en su lugar de trabajo en la comuna de Colina, llamado Fundo Algarrobal, y lo llevaron a la Base Aérea de Colina, donde estuvo detenido en tres ocasiones distintas, por un total de dos semanas y media aproximadamente. Fue llevado en una segunda ocasión a la misma base el martes 13 de noviembre de 1973, donde lo tuvieron todo el día. Después, en una tercera ocasión, lo detuvieron, también fue por el día; también que don **Sergio Enrique Flores Ramírez**, fue tomaron detenido, el 9 de mayo de 1984 en su casa en la comuna de Pudahuel y llevaron a una comisaría, donde estuvo un par de horas, a eso de las 5 a.m. lo trasladaron a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, donde estuvo unos 10 días detenido. Desde ese lugar fue trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago, por cinco días y luego fue llevado a la Fiscalía Militar da ahí a la cárcel pública durante cinco días. Después lo llevaron nuevamente a la Fiscalía Militar, posteriormente lo mandaron a la galería de transición, lugar en el cual quedó detenidos por un mes y medio más, siendo trasladado a la Penitenciaría, donde estuvo, veinte meses en prisión. Finalmente lo liberaron con firma semanal durante un año, luego cada quince días durante 5 meses y después mensual, por todo lo cual permaneció detenido un año y 10 meses; además que don **Fredy Raúl Cancino Berríos** fue detenido el día 27 de agosto de 1986, en calle San Antonio 427, Santiago, cuando estaba en su lugar de trabajo en la editorial Documentas, por personal de la CNI, siendo llevado al cuartel general de la CNI ubicado en calle Santa María 1453, Santiago, siendo liberado el día 29 de agosto de 1986; y que don **Jaime Barraza Contreras** fue detenido por



aproximadamente dos meses, en septiembre del año 1973, desde su casa, lugar en el cual lo tomaron detenido y lo trasladaron al Estadio Nacional, lugar en el que estuvo detenido otro mes más. En total permaneció detenido aproximadamente dos meses. Es por lo que desde la fecha del cese de los hechos señalados por los mismos demandantes, que no han sido controvertidos, que deben, en cada caso, contarse el cuadrienio al que se ha hecho referencia; luego, a la notificación de la demanda – ocurrida el día veintidós de enero de dos mil veinte, como consta del atestado del receptor Yessica Paredes Benavides – transcurrió en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por lo que la acción civil que deriva de tales presupuestos fácticos se encuentra prescrita. Y aun en el evento de estimarse que el plazo de prescripción sólo sea procedente contarlo desde la fecha en que el país volvió a la normalidad democrática, esto es, el 11 de marzo del año 1990, igualmente a la fecha de la notificación de la demanda se encontraría cumplido el plazo de prescripción de la acción. Del mismo modo si se cuenta desde la entrega del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, lo que ocurrió el 4 de marzo de 1991.

3° Que debe recalcar que ningún tratado internacional relativo a Derechos Humanos, ninguno, contempla la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil. No lo hace ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, ni el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra ni la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de modo que sólo la voluntariedad – esto es, *“la determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra razón*





*para lo que se resuelve*”, según el diccionario – puede llevar a concluir que una acción que la ley expresamente señala que es prescriptible, no lo sea.

4° Que, en consecuencia, al estar extinguida la acción por haberse ya resarcido el daño; y en todo caso por estar extinguida la acción resarcitoria por la prescripción, a entender del disidente, la demanda no puede prosperar.

**Regístrese y devuélvase, en su oportunidad.**

N°Civil-2895-2022.



Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M., Ministra Suplente Paola Cecilia Diaz U. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, diecisiete de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>